

nistrador de la Aduana Terrestre, de la cantidad de cuatrocientos setenta y seis pesos noventa y siete centavos, á título de derecho de consumo, adicional y contribucion federal, por cincuenta y siete bultos de mercancías extranjeras que recibieron en el Pailebot nacional "Flora" el 19 de Noviembre último.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—CC. Presidente.—*José María Iglesias.*—Ministros.—*M. Auza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*E. Montes.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*

Es copia que certifico. México, Agosto 14 de 1875.—*Enrique Landa.*

## COMPETENCIA

*Suscitada por el Juez de Distrito de Nuevo Leon al Alcalde 1º de Villa de Marín, para conocer de la causa que se está instruyendo á Ireneo Benavides, por los delitos de asalto, robo y homicidio perpetrado en la persona del súbdito americano, Sanders.*

*Pedimento del C. Fiscal de la Suprema Corte.*

El Fiscal interino dice: que el Juez de Distrito del Estado de Nuevo Leon inició competencia al Alcalde 1º de Marín, para que se inhibiera de conocer en la causa que se había instruido contra Ireneo Benavides

por la muerte del súbdito americano Sanders. El Alcalde de Marín, sostuvo su jurisdicción, y por haber insistido en la suya el Juez de Distrito, ambos remitieron sus actuaciones á esta 1ª Sala, á fin de que ella declarara quien era competente.

El hecho que dió causa á esta competencia fué el siguiente: Algunos auxiliares del contra-resguardo, entre los cuales estaba Benavides, intentaron registrar una carretela en que iba Sanders, por tenerse sospechas de que en ella se conducía una suma de dinero que se trataba de exportar sin los requisitos legales. Sin que consten en los autos todas las circunstancias que mediaron al querer registrar la mencionada carretela, sí aparece, que en el encuentro resultó muerto Sanders. Juzgados conforme á la ley de salteadores y plagiarios los auxiliares que pretendieron registrar la carretela, fueron condenados á muerte por el Alcalde de Marín los que se aprehendieron, siendo uno de ellos Ireneo Benavides. Fundado en este hecho el Juez de Distrito, cree ser el único competente para conocer en la causa, en virtud de que siendo Benavides empleado de Hacienda, solo á la justicia federal tocaba juzgarlo conforme á la fracción 8ª del art. 24 de la ley de 14 de Febrero de 1826. El Alcalde de Marín, á su vez, sostiene su jurisdicción apoyado en que, habiendo sido un verdadero asalto el que se ejecutó al matar á Sanders, conforme á la ley de salteadores y plagiarios solo á él le corresponde el conocimiento. El Promotor fiscal agrega otra razón, y consiste en que habiéndose fallado por el Alcalde de Marín, y habiendo su sentencia causado ejecutoria, no tenía ya objeto la competencia, puesto que ya no podía impedirse que conociera de lo que realmente había conocido. Apesar de esta razón, el Juez de Distrito insistió en sostener su jurisdicción, fundándose en que no estando consumado el hecho, defendía su jurisdicción para la ejecución de la sentencia. Dos de los compañeros de Benavides, fueron juzgados por el Alcalde de Marín,

y lo mismo que aquel, fueron también considerados por el expresado Alcalde como salteadores, y sentenciados á la última pena. Contra esta determinación, la Suprema Corte les concedió amparo, declarando que no estaban comprendidos en la ley de salteadores y plagiarios, y mandando que fueran consignados á la autoridad correspondiente. Como la jurisdicción del Alcalde 1º de Marín solo estriba en esta circunstancia, que fué asalto el que cometieron los auxiliares en el encuentro habido con Sanders, siendo falsa tal circunstancia, parece indudable que no tiene jurisdicción para conocer en la causa. Esto mismo sirve de contestación á la razón que ha hecho valer el Promotor, pues que habiéndose ordenado que los amparados fueran consignados al Juzgado correspondiente para que sean juzgados, claros es, que la sentencia del Alcalde de Marín no puede ejecutarse.

Bien conoce el que suscribe, que en todo rigor este razonamiento solo podría tener su exacta aplicación en cuanto á los amparados, y no respecto de Benavides que no lo ha sido, supuesto que las decisiones de la Corte no pueden aplicarse sino á los casos especiales que se le presenten y sobre los cuales determine. Pero tratándose del mismo caso en que se amparó y siendo los Magistrados que componen esta Sala los mismos que intervinieron en el amparo, parece muy natural que tengan en consideración al decidir la competencia, las razones que se tuvieron presentes al fallar sobre el amparo, á fin de no incurrir en contradicción, y de no faltar á la equidad.

Pero si el Alcalde de Marín no es competente, ¿lo será el Juez de Distrito? En opinión del que suscribe, nó. En verdad que la fracción 8ª del artículo 24 de la ley de 14 de Febrero de 1828, dispone que los jueces de Distrito conozcan en las causas criminales de los empleados de hacienda; pero á pesar de esto, el fiscal entiende que á este artículo, no puede dársele tanta extensión como la que le quiere dar el Juez de Dis-

trito de Nuevo León. Hay delitos que pueden cometer los empleados de hacienda, en virtud de los cuales esta sea perjudicada. Así cuando por descuido ó connivencia de un empleado, se ha introducido un contrabando, en este delito solo puede intervenir la jurisdicción federal, porque en tal caso está interesada la hacienda pública, puesto que se trata de defraudarla. Pero cuando, por el delito que se impute á un empleado, no se trate de defraudar al fisco, ni de ocasionarle un perjuicio, no puede concebirse que razón habría para que la jurisdicción federal interviniera. Sería necesario suponerse, lo que según nuestras instituciones es imposible: que los empleados de hacienda, cualquiera que fuera su categoría, gozaran fuero especial.

En el caso de Benavides, ya sea que resulte culpable ó inocente, la hacienda pública no puede resultar perjudicada. No hay motivo, pues, para que intervenga la justicia federal.

Tampoco puede alegarse como lo ha hecho el Juez de Distrito, que la justicia federal debe conocer de los incidentes criminales. No puede alegarse esto, porque en el caso presente, lo principal, el hecho por lo que comenzó á practicarse la averiguación, fué un delito que á primera vista aparece del orden común, un homicidio. Si este se cometió en desempeño de una comisión perteneciente á la hacienda pública ó por cualquiera otra causa, el Juez que conozca de lo principal lo decidirá, y no la justicia federal.

Por todas estas consideraciones, el Fiscal concluye pidiendo á la Sala se sirva determinar, que ni el Alcalde 1º de Marín ni el Juez de Distrito de Nuevo León, son competentes para conocer en la causa instruida contra Inico Benavides, sino la justicia ordinaria, pidiendo á la Sala, si lo cree necesario, mandar, para pronunciar su fallo, que se agregue testimonio de la sentencia dictada en el amparo solicitado por los compañeros de Benavides.

México, Setiembre 25 de 1875—*Velasquez.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Mayo 14 de 1875.

Vistos los autos sobre competencia suscitada por el Juez de Distrito de Nuevo Leon al Alcalde 1º de Villa de Marin, para conocer de la causa que se está instruyendo á Irineo Benavides, por los delitos de asalto, robo y homicidio perpetrado en la persona del súbdito americano Sanders; los informes de los jueces competidores en apoyo de su respectiva jurisdiccion; lo pedido ante esta 1ª Sala por el C. Fiscal, con todo lo demas que de autos consta, se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que respecto del Juez de Distrito de Nuevo Leon, los delitos por los que se procesa á Benavides, no afectan en manera alguna los intereses de la hacienda pública, único caso en el que los tribunales de ella, tanto por el artículo 97, en su frac. 2º de la Constitucion general, como por las demas leyes concordantes, son los competentes para avocarse el conocimiento de un negocio. Que los expresados delitos perpetrados por Benavides, son rigurosamente hablando y segun ahora se presentan, de orden puramente comun. Que si en el curso de la averiguacion apareciere algun incidente por el cual resulte interesada la hacienda pública, la autoridad judicial que lo descubra tendrá en cumplimiento de su deber, el cuidado de hacer en el tiempo oportuno, semejante declaracion y la consignacion correspondiente. Que la jurisdiccion de los Tribunales federales constituye un fuero especial, y atendida la mente de la Constitucion, el fuero debe restringirse y solo conservarse para aquellos asuntos expresamente contenidos en ella. Que respecto del Alcalde de Villa de Marin, la razon en que funda su jurisdiccion es, la de que el delito principal por-

que juzga á Benavides, es el de asalto y homicidio; lo cual no es exacto, porque el carácter de gavilla que se dá á la seccion de auxiliares del contra-resguardo de la frontera del Norte que salió á conocer el carruaje del ciudadano americano Alejandro Sanders, y á la que pertenecia Irineo Benavides, es indebido, por su misma generalidad; que esto mismo debe decirse en cuanto al carácter de salteadores que se les dá á los individuos que salieron en el parage nombrado «Las Tinajas,» y entre los que se dice se hallaba el referido Benavides, el 17 de Diciembre del año de 1873, á reconocer el carruaje de Sanders. Que siendo la ley de plagiaros y salteadores, una ley extraordinaria, solo debe aplicarse á los casos claramente comprendidos en ella. Que para todos los demas y atento como se ha dicho el espíritu de nuestras instituciones, el fuero comun debe ser atendido de preferencia, máxime en el de Benavides, en que se hace necesario depurar los hechos en un juicio que no tenga la premura de la expresada ley de plagiaros y salteadores; de conformidad con lo pedido por el ciudadano fiscal, se decreta:

Primero: Que ni el Alcalde 1º de Villa de Marin, ni el Juez de Distrito de Nuevo Leon, son competentes para conocer de la causa que se está instruyendo á Irineo Benavides, por asalto y homicidio perpetrado en la persona de D. Alejandro Sanders.

Segundo: Que para seguir conociendo de esta causa, es competente la autoridad judicial comun, del lugar en que se dice se verificó el delito.

Remítanse las actuaciones respectivas á cada uno de los Jueces competidores, con cópia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*M. Auza.*

—*Ignacio M. Altamirano.*—*L. Velasquez.*  
 —*M. Zavala.*—*Enrique Landa, Srío.*  
 Son cópias. México, Julio 15 de 1875.  
 —*Enrique Landa, secretario.*

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por el C. Lic. Luis B. Santaella, en representación del reo Pedro Reyes, contra el C. Gefe político de Silacayoapan. por violacion de garantías.*

*Pedimento del C. Promotor fiscal.*

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal, evacuando el traslado que el día 26 del corriente se me ha dado, expone: que en su concepto procede el recurso de amparo promovido por el C. Lic. Luis B. Santaella á nombre de Pedro Reyes, contra la sentencia de muerte pronunciada por la autoridad política de Silacayoapan, y así pide á vd. se sirva decretarlo, por lo que brevemente pasa á manifestar; reservándose al tiempo de alegar, ampliar los fundamentos de su pedido.

Basta saber que los delitos de asalto, robo, plagio é incendio, por los que fué sentenciado á la última pena el quejoso Reyes, fueron cometidos en 17 de Marzo de 1870; y que la autoridad política funda su fallo en las disposiciones de 20 de Abril del presente año, 18 de Abril de 1870 y 12 de Junio de 1871, posterior á los hechos referidos, para persuadirse que la violacion es flagrante de la garantía á que se refiere el art. 14 de la Carta Federal, puesto que segun éste, "nadie puede ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exsactamente aplicadas á él."

Por lo espuesto, este Ministerio pide á

vd. se sirva en definitiva, amparar al quejoso en los términos que lo ha solicitado.

Oaxaca de Juarez, Diciembre 28 de 1874.  
 —*José M. Ballesteros.*

*Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Oaxaca de Juarez, Enero 25 de 1875.

Visto el presente juicio de amparo promovido por Pedro Reyes de San Pedro Aite, Distrito de Morales, contra la sentencia de muerte que pronunció en 20 de Mayo de 1874, el Jefe Político de Silacayoapan, por los delitos de asalto y plagio, robo é incendio perpetrados en cuadrilla y en despojado, por creer violadas en su persona las garantías que otorga la Constitucion General de la República en sus arts. 14 y 20, frac. 5º: Vistas las constancias de la causa que en testimonio corre agregada; lo pedido por el Ministerio fiscal; lo alegado por el defensor y personero del quejoso y cuanto mas ver convino.

Considerando: que en el procedimiento para la averiguacion de los delitos de que fué acusado Reyes, aparece, (fs. 9 del testimonio), que despues de hecha la confesion con cargos no se le requirió para que nombrase defensor ó en su caso se le nombrara de oficio, sino que inmediatamente aparece la citacion para sentencia.

Considerando: que si bien es cierto la frac. 5ª del art. 20 citado previene que al acusado se le oiga en defensa por sí ó por persona de su confianza, y en la causa no aparece que se le haya prohibido una ú otra cosa, tambien lo és, que la autoridad no mandó que se defendiera de los cargos por persona ilustrada, segun el espíritu de la disposicion citada que previene, que á los acusados se les manifieste la lista de los defensores de oficio.

Considerando: que á todo acusapo dormas ilustracion que se le suponga, lo agovia la idea del castigo que debe imponersele por el delito que se le imputa si es inocente, ó la perpetracion del crimen que és el tomen-